

tículos 13, 16 y 20 de la Constitución federal; y Considerando: que en el informe rendido por el C. Comandante del resguardo aparece, que fué Quezada dado de baja en este cuerpo, y consignado á la limpia del de Gendarmes por haber reincidido en el delito de ebriedad; que en el expediente remitido por el C. Gobernador de Distrito no aparece probado que el quejoso entrase al servicio; ni permanezca en él con su voluntad; se decreta: que se reforma la sentencia pronunciada el 15 de Junio próximo pasado por el Juzgado 1º de Distrito de esta Ciudad; y que la Justicia de la Unión ampara y protege al C. Juan Quezada, contra el acto del C. Comandante del cuerpo de Gendarmes, que lo retiene en este cuerpo; debiendo quedar inmediatamente en libertad.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado 1º de Distrito, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos y firmaron.—(Firmados.)—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Julio doce de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Promovido por el C. Juan Chavez ante el Juzgado de Distrito de Querétaro, por violacion de las garantías que otorga el art. 14 de la Constitución federal.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que Juan Chavez fué aprehendido el día 5 de Abril del año corriente como á las tres de la tarde, por haber intentado robar á Remigio Chavez y á su hermana política. La tentativa tuvo lugar en despoblado, á mano armada, y acompañando al reo dos individuos mas. El Gefe político de San Juan del Río, procedió á levantar la competente informacion de la que resulta: 1º haber sido capturado Juan Chavez por una escolta de gendarmes en el camino que conduce de la hacienda de la Llave á las Calabazas, llevando consigo la espada, cuyo diseño obra en este expediente: 2º que Remigio Chavez y su hermana política María Leonarda aseguran que tres hombres armados trataron de detenerlos en el camino prescrito, cuando la aparicion repentina de una escolta los obligó á huir: 3º que el presunto reo fué alcanzado por la referida escolta, mas no sus cómplices: 4º presentado éste á los agredidos afirman ser el mismo que quiso robarlos á pesar de haber llevado la cara cubierta: 5º que el cabo de gendarmes que verificó la aprehension, dice haber observado que el reo perseguia con un machete en la mano á los quejosos; aunque no vió á los cómplices de aquel: 6º que otro soldado de la misma escolta asegura haber procurado alcanzar á los otros dos malhechores, quienes brincaron una cerca, en cuyo acto dió á uno de ellos un sablazo en la cabeza.

Así las cosas, presentóse José Sanchez manifestando haber sido robado el día cuatro del mismo Abril, por una gavilla de

cinco individuos, entre los que se hallaba Juan Chavez, á juzgar por el pañuelo que se recojió de éste. Dos testigos declaran que los días tres, cuatro y cinco de Abril estuvo trabajando en el campo el acusado hasta las doce del día.

Sentenciado éste á la pena capital por el C. Gefe político del partido mencionado, fué suspendida la ejecucion con motivo de haberse interpuesto el recurso de amparo.

Es difícil resolver la cuestion sobre si procede ó no el indicado recurso, porque puede ser considerada bajo diversos puntos de vista, con la latitud que al efecto tienen los jueces constitucionales.

Desde luego aflige al ánimo la consideracion de que un jóven de veintidos años dedicado á la agricultura, y falto de aquellos principios severos de moral á que conduce una buena educacion, sea entregado al verdugo para servir de escarmiento á los imitadores que pueda tener. Así mismo agobia por otra parte la idea de que son indispensables medios represivos enérgicos para contener el torrente de desmoralizacion, que amenaza llevarse en pos de sí á nuestra trabajada sociedad.

Los legisladores de 1857 creyeron no debia omitirse medio alguno para poner á salvo la vida del hombre, así como las demas garantías que con el nombre de individuales, forman el punto objetivo de toda sociedad. Así vemos que en el art. 29 del Pacto fundamental establecieron por regla: "que solamente el Presidente de la República de acuerdo con el consejo de ministros y con aprobacion del Congreso de la Union, y en los recesos de éste, de la diputacion permanente, puede suspender las garantías otorgadas en esta Constitucion, con excepcion de las que aseguran la vida del hombre." Luego existen garantías que no pueden suspenderse, y son éstas las que aseguran la vida del hombre.

El art. 126 previene, que la Constitucion sea la ley suprema de toda la Union, y el 127 expresa el modo de ser reformada. Por

último, el art. 101 somete á los Tribunales de la Federacion la resolucion de toda controversia que se suscite por leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales.

Como el art. 23 del mismo Código permite la aplicacion de la pena de muerte á los saltadores; no puede haber cuestion sobre si una vez considerado Chavez como saltador se le pueda aplicar ese suplicio: mucho ménos cuando así lo manda la ley de 18 de Mayo último emanada del Congreso de la Union.

Lo que senota en el caso presente, es la falta de la garantía que otorga la fraccion 5ª del artículo 20 de la Constitucion, que siendo de las que aseguran la vida del hombre no puede ser suspensa, segun el art. 29 de la misma. En efecto, no se ha oído en defensa al acusado por sí ó por persona de su confianza, ni se le nombró defensor de oficio, ya que no se le presentó la lista de los que existieran, para que eligiera el que mas le conviniere.

De aquí ha resultado que se considere probada la tentativa de robo, por la que se ha procesado á Chavez, con solo el dicho de los quejosos, contra el tenor de la ley 18 tit. 16 partida 3ª; pues la escolta que la evitó con su aparicion oportuna no llegó á presenciarse. El testimonio del cabo de la misma, quien asegura haber visto perseguir á los quejosos por el reo, está en abierta contradiccion con las aseveraciones de estos, que se limitan á referir que á la simple aparicion de la escolta huyeron los tres agresores, quienes antes habian proferido algunas voces amenazantes para detenerlos en su camino.

Los indicios que existen contra el condenado no constituyen una prueba plena, y así es que debieron desecharse conforme á la ley 12. tit. 14 partida 3ª. Por lo mismo, no puede considerarse legalmente probado que Juan Chavez sea saltador.

Por lo que, el Promotor pide: se sirva vd. declarar, que la justicia de la Union

ampara y protege á Juan Chavez por haber sido violadas en su persona las garantías que otorgan la fraccion 5ª del art. 20, y el 29 de la Constitucion federal.

Querétaro, Junio quince de mil ochocientos setenta y uno.—*Juvis Castañeda.*

### *Sentencia del Juez de Distrito.*

Querétaro Junio veintitres de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo promovido por el C. Isidro Chavez á nombre de su hijo Juan del propio apellido, por creer violada en la persona de su referido hijo la garantía que concede la Constitucion general en la parte segunda del art. 14 al haberlo juzgado y sentenciado á muerte el C. Prefecto de San Juan del Rio segun la ley de 9 de Abril del año próximo pasado; el auto de suspension del acto reclamado pronunciado por este Juzgado en 2 del presente, el ocurso respectivo; el informe que con justificacion rindió el Prefecto de San Juan del Rio; el pedimento Fiscal y lo demás que ver convino. Considerando:

Primero: que al haber suspendido este Juzgado la ejecucion del reo Juan Chavez, lo hizo por los fundamentos expresados en el propio auto, sin que dicha suspension implicase la concesion del amparo, sino simplemente la sustanciacion del recurso; á fin de poder resolver si existia ó no violacion de garantía.

Segundo: que segun la acta formada por el Prefecto de San Juan del Rio, consta, que al reo Juan Chavez se le juzgó y sentenció por el asalto cometido en las personas de Remigio Chavez y María Leonarda el dia 5 de Abril del presente año, en el camino que conduce de Tequisquiapam á la ciudad de San Juan del Rio, así como por las declaraciones de José Sanchez quien

aseguró formar parte el reo de una gavilla que el dia 4 del propio mes lo asaltó y robó en el camino de la hacienda de la Llave á las Calabazas: que el indulto respectivo fué negado por la H. Legislatura del Estado, fojas 18.

Tercero: que segun el artículo 3º de la ley de 9 de Abril del año próximo pasado, los salteadores y plagiarios serán juzgados sumaria y verbalmente por las autoridades cuyos agentes hayan hecho la aprehension, bien sean las autoridades políticas de los Distritos, gefes militares de la Federacion ó de los Estados: que la aprehension del reo fué hecha segun consta del parte del gefe de la escolta y de la acta respectiva á fojas 10, el dia 6 de Abril del presente año.

Cuarto: que el artículo 14 de la Constitucion, que es el que sirve de fundamento á la queja, dice en la parte final: "Nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho, exactamente por el Tribunal que previamente haya establecido la ley" que en este caso; al ser juzgado y sentenciado segun la ley de 9 de Abril de 1870 por el C. Prefecto de San. Juan del Rio, lo fué por ley dada con anterioridad al hecho, exactamente aplicada á él y por el Tribunal previamente establecido.

Quinto: que respecto á las garantías que otorga la Constitucion en sus artículos 13, 19, 20 y 21 que prohiben la existencia de leyes privativas, tribunales especiales y establecen los términos, trámites y garantías del hombre en los juicios criminales, estando suspensas por el artículo 1º de la ley de 9 de Abril de 1870 para los salteadores y plagiarios, no puede existir violacion posible no disfrutándose de ellas.

Por todo lo expuesto y con fundamento del artículo 101 de la Constitucion y del artículo 1º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, se declara:

Primero. La justicia de la Union no ampara ni protege al reo Juan Chavez contra

la sentencia pronunciada por el C. Prefecto de San Juan del Rio.

Segundo: Notifíquese, sáquense las copias mandadas por la ley y elévense estos autos á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion para su revision, conforme á los artículos 13 y 27 de la ley de 20 de Enero de 1869.

Así definitivamente juzgando lo decretó, mandó y firmó el C. Juez de Distrito del Estado, Lic. Victor de la Peña, por ante mí de lo que doy fé.—*V de la Peña—Ante mí.—Francisco Ruiz.*

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Julio cinco de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo que por un telégrama de 2 de Junio último, promovió ante el Juez de Distrito de Querétaro el C. Isidro Chavez por su hijo Juan del mismo apellido, exponiendo: que éste había sido condenado á muerte por el Prefecto de San Juan del Rio, y pidiendo que se suspendiera la ejecucion, á reserva de remitir el escrito formalizando su recurso. Visto el auto de suspension del acto reclamado, pronunciado por el Juez; el escrito que remitió el quejoso en que alega que Juan Chavez había sido aprehendido y conducido á San Juan del Rio, donde el Prefecto lo juzgó y lo sentenció á la pena Capital por saltador, siendo incompetente esa autoridad, por no haber datos para su fallo y habiendo violado con este el final del artículo 14 de la Constitucion de la República. Visto el informe del Prefecto responsable, en que afirma que juzgó y sentenció al hijo del promovente, conforme á la ley de 11 de Abril de 1870: el testimonio de la causa

que le instruyó como saltador, agregando la constancia de haberle negado el indulto la Legislatura del Estado; el pedimento del Promotor fiscal, en que aduciendo que al acusado no se le había oído en defensa y otras razones favorables, asienta la conclusion, de que no puede considerarse legalmente probado que sea saltador, y apoya el amparo pretendido; la sentencia del Juez de Distrito y todo lo demás que ver convino. Considerando:

Primero. Que la ley citada de 11 de Abril á la cual normó el Prefecto sus procedimientos en sus disposiciones, respecto de los saltadores supone la condicion natural de que lo sean, y por tanto que esté plenamente probado el cuerpo de esa clase de delito; y que en el caso de Juan Chavez, no se halla establecido y plenamente probado ese hecho, pues la misma autoridad, en la parte expositiva de su fallo, llama al delito que juzga, conato de robo con asalto en camino, y en su último fundamento afirma que los datos del proceso dan á conocer que existen fuertes presunciones contra el reo.

Segundo: que al no haber obrado el Prefecto en el supuesto expresado de la referida ley, la justicia ordinaria ha debido conocer de Juan Chavez, para no violarse como se ha violado, con la condenacion dictada por aquel funcionario, la garantía que concede al acusado la parte última del art. 14 de la Constitucion de la República. Por las consideraciones expuestas, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente:

Primero. Es de revocarse y se revoca la sentencia del Juez de Distrito de Querétaro fecha 22 de Junio próximo pasado, que dice: "la Justicia de la Union no ampara ni protege al reo Juan Chavez contra la sentencia pronunciada por el C. Prefecto de San Juan del Rio.

Segundo: La Justicia de la Union ampara y protege al mismo Juan Chavez contra

aquella sentencia que lo condenó á la pena de muerte.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los C.C. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos mexicanos, y firmaron.—(Firmados)—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazques.*—*M. Zavala.*—*J. García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México Julio catorce de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

## COMPETENCIA

*Seguida entre los Jueces de Tepic y Guaymas, sobre conocer de la demanda promovida por D. Juan A. Robinson contra D. Santiago Campillo.*

### PEDIMENTO DEL C. FISCAL.

El Fiscal dice: que D. Juan A. Robinson se presentó ante el Juez de 1ª instancia de Guaymas, demandando cierta cantidad de pesos á Santiago Campillo, vecindado en Tepic, por cuyo motivo fué necesario librar el exhorto respectivo, á fin de que se le emplazara en la forma legal; mas el resultando de esta diligencia fué, que Campillo declinara la jurisdicción del Juez de Guaymas, y que á su solicitud, el de Tepic suscitara competencia al 1º para conocer de la demanda de Robinson.

El Fiscal, al examinar estos autos, no puede menos que conocer, que por lo que hace al Juez de Tepic, no hay ni la mas po-

queña razón legal para haber promovido la presente competencia. Si él se hubiera fijado seriamente en las aducidas por el de Guaymas, indudablemente habria codido en una pretension que solo hace disimulable lo complicado de nuestra legislación.

Resultando de las mismas constancias que se tienen á la vista, que Campillo estaba, en la época de esta competencia, domiciliado en Guaymas; que en ese lugar vivia su familia; que allí tenia sus bienes raíces y muebles; que una circunstancia puramente casual lo hizo salir para Tepic, donde se puede asegurar que solo estaba de paso: confesado por él mismo que en este último lugar, no tenia ningunos bienes raíces; que tampoco habia vendido ningunos de los que tenia en Guaymas; que no se habia presentado al Ayuntamiento de Tepic para que lo reconociera como domiciliado en este lugar; todo esto bastaba para decidir desde luego, que la autoridad de Guaymas era la competente; sin que para esto sirviera de obstáculo la excepcion de vecindad, única razón opuesta por Campillo contra la jurisdicción del Juez que lo mandaba emplazar; pues, como enseñan todos nuestros autores, y eso se sabe aun por los muy principiantes en la ciencia del derecho, que la vecindad es una cosa muy distinta del domicilio; que no debe confundirse la una con el otro, y en fin, que si este surto fuero, la otra nó.

Por lo expuesto y con fundamento de la ley 32 tit. 2º part. 2ª, el Fiscal concluye con las siguientes proposiciones:

Primera: Se declara que el Juez de 1ª instancia de Guaymas, es el competente para conocer de la demanda que D. Juan A. Robinson ha promovido contra D. Santiago Campillo sobre pesos.

Segunda: Devuélvanse las actuaciones en la forma debida, remitiendo copia de la sentencia al Juez de Tepic para su conocimiento, y archívese el presente Toca.

México, Junio veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.—*Altamirano.*